Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la modificación del RD 1971/1999, de 23 de diciembre, para reconocer a las enfermedades neurodegenerativas un grado de discapacidad mínimo del 33% y para la creación de un nuevo tipo de discapacidad basado en la tipología de estas enfermedades.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 28

7 de febrero de 2020

Pág. 13

162/000085

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, para reconocer a las enfermedades neurodegenerativas un grado de discapacidad mínimo del 33% y para la creación de un nuevo tipo de discapacidad basado en la tipología de estas enfermedades, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El diagnóstico de Esclerosis Múltiple (EM), así como el resto de enfermedades neurodegenerativas, impacta en las vidas de las personas diagnosticadas y en la de sus familias. Se caracterizan por la muerte de neuronas en diferentes regiones del sistema nervioso y el consiguiente deterioro funcional de las partes afectadas. Todas presentan como característica su cronicidad y su evolución progresiva. En todos los casos, estas enfermedades pueden provocar alteraciones físicas y cognitivas que evolucionan de forma impredecible. El grave deterioro físico y cognitivo que se deriva de las mismas, supone una desprotección para las personas adultas en edad laboral que las padecen. Así, pueden surgir problemas en relación con la posibilidad de continuar en su puesto de trabajo, con sus perspectivas de promoción y carrera profesional, y la conciliación entre su vida laboral y el desarrollo de la enfermedad o con las necesidades de conciliar de las personas cuidadoras.

Es por estos motivos que las distintas asociaciones de pacientes reclamen que se reconozca el 33 % de discapacidad automáticamente con el diagnóstico. Las personas con enfermedades neurodegenerativas (Esclerosis Múltiple, Parkinson, Alzheimer, ELA, Neuromusculares...) deben tener acceso a alguna protección social, hasta ahora inexistente, inmediatamente tras el diagnóstico. Actualmente, en el Estado español esta protección social depende de que se acredite una discapacidad a través de unos baremos, más allá de otras consideraciones. Sin embargo, las enfermedades neurodegenerativas, que son incurables, van avanzando más o menos rápido, y afectan negativamente a la calidad de vida desde el comienzo. Así, por ejemplo, en la Esclerosis Múltiple la sintomatología es muy diversa y existen numerosas manifestaciones «invisibles» de la enfermedad, como la fatiga, situaciones de brotes, alteraciones cognitivas... que no se miden en esos baremos, pero que indudablemente inciden en el día a día de las personas.

Las carencias económicas para hacer frente al cuidado casi permanente del enfermo, conlleva en muchos casos el abandono del trabajo por parte del enfermo o enferma y de su cuidadora o cuidador principal, con el consiguiente perjuicio que esto implica. El hecho de no considerar las necesidades de estas personas en el sistema de valoración o de no reconocer un cierto nivel de protección por el hecho del diagnóstico, comporta igualmente situaciones de desamparo y desprotección para este colectivo. Según los datos actuales, 7 de cada 10 personas dejan de trabajar diez años después del diagnóstico.

Con el reconocimiento automático de una discapacidad del 33%, y el consiguiente acceso a medidas de apoyo, se conseguiría que las personas afectadas por estas enfermedades se mantuvieran activas el mayor tiempo posible, contribuyendo su calidad de vida y bienestar y al mismo tiempo a disminuir el gasto social.

Para ser considerada una persona con discapacidad se requiere un reconocimiento igual o superior al 33% de grado de discapacidad, y es un requisito imprescindible para acceder a medidas de protección social (incentivos a las empresas, subvenciones para el empleo autónomo, reserva de plazas, adaptaciones para oposiciones, empleo protegido...), contar con apoyo en estudios y formación, obtener ayuda para realizar adaptaciones en el hogar, etc.

En 2011 y 2017 fueron ya presentadas y aprobadas en las Comisiones de Sanidad y de Discapacidad, proposiciones no de ley en las que solicitaba al Gobierno que se regulase la posibilidad de reconocer el 33% de discapacidad junto con el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa cuando la persona afectada lo solicite, y sin embargo no se ha actuado todavía al respecto. En estas proposiciones también se instaba a crear un nuevo tipo de discapacidad para las enfermedades neurodegenerativas, así como una atención especial a los casos urgentes y graves, siendo en ambos casos aprobadas por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios.

El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, regula el procedimiento por el cual a una persona se le reconoce

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 28

7 de febrero de 2020

Pág. 14

un determinado grado de discapacidad. Dependiendo del grado reconocido, se puede tener acceso o no a ciertas ayudas o prestaciones. El baremo establecido afecta negativamente a los derechos y a la igualdad de oportunidades que, como ciudadanas y ciudadanos, tienen reconocidos todas las personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, ya que no se están adoptando las medidas necesarias para que estas personas disfruten de sus derechos en condiciones de igualdad.

Dentro de las prestaciones de la Seguridad Social, tampoco el sistema de valoración para acceder a pensiones por incapacidad permanente (parcial, total, absoluta) o gran invalidez, tiene en consideración las particularidades y necesidades de las personas con enfermedades neurodegenerativas.

Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, en concreto, los baremos utilizados para determinar del grado de discapacidad, debiendo reconocer tras el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas un porcentaje mínimo de discapacidad del 33%, como corresponde a la especificidad, la realidad y las necesidades diarias que genera la evolución de estas enfermedades.

2. Adoptar las medidas oportunas para atender las peticiones de las asociaciones de enfermos de Esclerosis Múltiple, Parkinson, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, referentes a la creación de un nuevo tipo de discapacidad basado en la tipología propia de estas enfermedades.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2020.—**Néstor Rego Candamil**, Diputado.—**Laura Borràs Castanyer**, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.

162/000086

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al sector olivarero español y el desarrollo de medidas que frenen la crisis en el precio del aceite, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Tras un año marcado por el desplome de los precios del aceite de oliva, 2020 se iniciaba con los precios en origen entre un 20% y un 30% más bajos que el año anterior, con una tendencia bajista, alcanzando precios que llegaban a estar por debajo de los costes de producción.

Esta bajada de precios no es puntual. El sector olivarero la viene padeciendo desde hace tiempo y está poniendo en grave peligro la economía de muchas familias. El sector reclamó la puesta en marcha de medidas de apoyo y el Comité de Gestión de Mercados Agrícolas de la Unión Europea aprobó, en octubre de 2019, la activación de la ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva, cuya finalidad es la retirada de parte de la cosecha de aceite para bajar la oferta y, en consecuencia, subir los precios.

Las dos primeras licitaciones para el almacenamiento privado autorizadas por el Comité de Gestión de Mercados de la Comisión Europea, a finales del año pasado, no dieron los resultados deseados, por el escaso volumen de aceite retirado y los límites de ayuda concedida, impidiendo que el precio repuntara.

En la tercera licitación, de las cuatro programadas, celebrada el pasado miércoles 29 de enero para fijar el importe de la ayuda al almacenamiento privado, se aceptaron ofertas por un volumen de 149.630 toneladas, lo que permite almacenar con ayuda el 90,5% del volumen de aceite presentado por los operadores españoles, con una ayuda máxima de 0,88 euros por tonelada y día para todas las categorías de aceite.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han reclamado almacenar 200.000 toneladas para que el sistema sea eficiente, en función tanto de la recolección como de la evolución del mercado de la campaña oleícola.